

## DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO

# SESIÓN 5: PREPARACIÓN – REVISIÓN JURIDICA

El siguiente es un extracto de la revisión del marco jurídico de Zimbabwe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) y del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) relacionado a la protección de los desplazados internos, publicado en diciembre de 2014. Disponible (en inglés) en: <http://goo.gl/637ZCD>

### RECOMENDACIONES CLAVE

Las recomendaciones clave del IDMC y el NRC al Gobierno, luego de la revisión de los instrumentos legales debatidos en los capítulos temáticos, son las siguientes:

1. Incorporar las disposiciones de la Convención de Kampala en la legislación nacional de manera que se establezca un marco nacional que aborde el desplazamiento interno de una manera integral.
2. Identificar y nombrar legalmente una institución nacional responsable de la coordinación de todos los esfuerzos destinados a proteger y buscar soluciones duraderas para los desplazados internos, incluido el enlace con los actores humanitarios y de desarrollo nacionales e internacionales y con las organizaciones de la sociedad civil en la protección y asistencia de los desplazados internos. La definición legal del mandato de la institución nacional responsable de los desplazados internos debe estar acompañada por la provisión de una asignación presupuestaria anual específica para que dicha institución cumpla sus tareas asignadas y por el requerimiento de recurrir a la financiación externa en caso de no disponer de suficientes recursos para hacer frente a los problemas del desplazamiento interno.
3. Incorporar a la legislación local una definición de desplazados internos de acuerdo con las establecidas en la Convención de Kampala y en los Principios Rectores de la ONU, aunque dejando en claro que los ejemplos de las causas del desplazamiento en la definición (i) no son exhaustivos y que la definición (ii) no crea una condición jurídica específica, sino que debe utilizarse para abordar las vulnerabilidades específicas de los desplazados internos por medio de la disposición correspondiente según las leyes y políticas pertinentes.
4. Consagrar en una ley nacional la prohibición de la discriminación basada en el desplazamiento, así como la discriminación entre desplazados internos o individuos y comunidades no desplazadas por cualquier motivo, incluidos la raza; el color; el sexo; el idioma; la religión o creencia; la opinión política o de otro tipo; el origen nacional, étnico o social; la condición legal o social; la edad; la discapacidad; la pobreza; el nacimiento o cualquier otro criterio similar.
5. Incorporar disposiciones en la legislación nacional que prohíban todas las formas de desplazamiento arbitrario, según se define en la Convención de Kampala y en los Principios Rectores de la ONU y formular criterios que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario, para determinar cuándo se puede considerar que un acto determinado constituye un desplazamiento arbitrario. Dichas formulaciones deben considerar, en particular, el caso de los desalojos forzados, los cuales solo pueden ser llevados a cabo legalmente en circunstancias excepcionales y en plena conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y del derecho humanitario.

6. En relación con las garantías relativas a los derechos de vivienda, tierra y propiedad: (i) reafirmar en la legislación pertinente que los desplazados internos tienen el derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de los que fueron privados o, si eso fuese imposible, a que se los indemnice por cualquier pérdida de vivienda, tierra y bien de conformidad con la Convención de Kampala, los Principios Rectores de la ONU y los Principios Pinheiro y, con este fin, tener acceso efectivo a tribunales o mecanismos de resolución de conflictos institucionales alternativos; (ii) reformar las leyes que generan inseguridad de tenencia, especialmente la Ley de control de normas de vivienda, la Ley de planificación urbana y rural regional y otras leyes que permiten el desplazamiento arbitrario, inclusive establecer la obligación legal de buscar alternativas antes de realizar demoliciones o desalojos.
7. Promulgar leyes específicas para: (i) la recopilación regular de datos de aquellos desplazados internos, desagregados por edad y sexo, que se consideran necesarios para informar a los programas focalizados de desarrollo o humanitarios, y  
(ii) el mantenimiento y la protección de datos relevantes sobre los desplazados internos de una manera confidencial y segura para garantizar la protección de la privacidad de los desplazados internos. Las dos tareas se podrían lograr por medio de una legislación separada o, respectivamente, (i) por medio de una enmienda a la Ley de censos y estadísticas y (ii) por medio de la inclusión de datos relativos al desplazamiento en la lista de categorías de divulgación de información que se presume es irrazonable, de acuerdo con las Secciones 61 y 52 de la Constitución.
8. Adoptar, de acuerdo con los requerimientos específicos de la Convención de Kampala y los Principios Rectores de la ONU, una política que garantice la total participación de los desplazados internos en todas las iniciativas que tengan un impacto en sus vidas y que el Estado establezca todas las medidas razonables necesarias para buscar el consentimiento informado y libre de los desplazados internos y las comunidades afectadas por el desplazamiento en relación con cualquier decisión sobre desplazamiento o reasentamiento. Asimismo, se deben establecer disposiciones específicas para garantizar que todos los grupos con necesidades particulares formen parte de la planificación y la gestión de la búsqueda de soluciones duraderas. With this in mind, a national con- In the context of the Kampala Convention and other supranational normative frameworks. Se podría establecer un foro consultivo con representantes de los desplazados internos y de las comunidades locales con vistas a proporcionar recomendaciones a la institución nacional a cargo de la coordinación de la protección de los desplazados internos y de las actividades de asistencia.
9. Garantizar que existan recursos adecuados para abordar las tres etapas del desplazamiento. Esto se podría lograr: (i) teniendo en cuenta los recursos que se necesitan (incluidos los fondos presupuestarios, recursos humanos y bienes humanitarios) cuando se redacten las leyes y políticas relativas a los desplazados internos; (ii) coordinando la promulgación de las leyes y las políticas con los ciclos presupuestarios del gobierno; y (iii) garantizando que las autoridades con responsabilidad en relación con los desplazados internos cuenten con los fondos adecuados.